



**Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 28/05/2019

Radicado	08001-33-33-014-2018-00129-00
Medio de control o Acción	Tutela
Demandante	Federico David Maturana Córdoba
Demandado	Defensoría del Pueblo –; Universidad Nacional de Colombia - y el Departamento Administrativo de la Función Pública.-
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME

Señor juez, paso el expediente de la referencia, contentivo de una acción de tutela, informando que el mismo fue asignado a este Despacho por reparto. Contiene solicitud de Medida provisional.

PASA AL DESPACHO

Para admisión y decidir medida provisional

CONSTANCIA

Consta de un cuaderno principal de 26 folios. Acta Individual de Reparto del 27-05-19.-

**ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO**

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2.019).

Radicado	08001-33-33-014-2018-00129-00
Medio de control o Acción	Tutela
Demandante	Federico David Maturana Córdoba
Demandado	Defensoría del Pueblo; Universidad Nacional de Colombia -Departamento Administrativo de la Función Pública.-
Juez (a)	Guillermo Osorio Afanador

El señor **Federico David Maturana Córdoba**, presenta demanda en ejercicio de la Acción de tutela contra la **Defensoría del Pueblo, la Universidad Nacional de Colombia y el Departamento Administrativo de la Función Pública**, solicitando el amparo a los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, defensa, contradicción y mínimo vital.-

Previo a decidir lo que corresponda sobre la admisión de la acción de tutela, advierte el Despacho que en el presente caso se solicita una medida provisional con el fin de proteger los derechos fundamentales del accionante, de conformidad con los artículos 7 del Decreto 2591 de 1991 y 230 de la Ley 1437 de 2011.

La acción de tutela, prevista por el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos en que así se autoriza.

El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece que el juez constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” y dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte. En efecto, el artículo 7, dispone:

“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las medidas provisionales pueden ser adoptadas en los siguientes casos: **“(i) cuando resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación o; (ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para precaver que la violación se torne más gravosa”** 1. (Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).

Dice además la mencionada Corte, que las medidas cautelares pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues *“únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida”*. (Auto 035 de 2007.)

En cuanto a la procedencia de la medida de suspensión provisional la Corte Constitucional ha expresado:

“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la medida”^{[4].¹}

De igual forma, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que toda medida provisional debe cumplir con dos principios a saber; *fumus boni iuris*, y el *periculum in mora*, como lo estableció en la sentencia SU-913 del 2.009, al manifestar:

“(…) En tanto se analizaron dos de los más importantes principios que rigen la práctica de medidas cautelares, para efecto de garantizar un justo término de equidad en el proceso. Estos son: el periculum in mora y el fumus boni iuris, los cuales deben aparecer de forma concurrente para asegurar la proporcionalidad y congruencia de la medida. El primero, periculum in mora, tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. El segundo, fumus boni iuris, aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal. Estos dos principios, asegura la doctrina, deben operar de manera concurrente, al punto que la falta de uno de estos elementos, debe dar lugar a que: i. se rechace la medida cautelar o ii. Se otorgue la medida pero de manera limitada. Por ejemplo, si el valor de la causa en juicio ejecutivo es proporcionalmente mínimo a la solvencia del demandado, la medida carecerá de periculum in mora, caso en el cual no habrá necesidad de hacer juicio alguno sobre el principio fumus boni iuris, pues de plano resulta innecesaria la medida”

¹ T-733 de 2013



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Ahora bien, en el presente caso, el accionante solicita la suspensión del proceso de selección de defensores públicos 2.019, a fin de que no resulte nugatorio el amparo a sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, a la igualdad y mínimo vital ante la inminencia de la fecha de terminación de actividades e inicio programado del proceso de selección de defensores públicos 2.019.-

En ese sentido se observa que las pruebas aportadas, por sí mismas, no acreditan circunstancias de protección constitucional especial, que justifiquen la intervención del juez constitucional en este momento del trámite.-.

En efecto, del estudio del expediente se observa que el señor Federico David Maturana Cordoba, en desarrollo del concurso público, interpuso una reclamación que le fue negada, sin embargo dicha circunstancia, per se, no permite siquiera inferir que es inminente la publicación de la lista de elegibles, o que si se llega a publicar durante el trámite de la presente acción de tutela, se lleguen a realizar nombramientos para el cargo al que el accionante aspiró y se torne carente de objeto la presente acción.-

Al respecto, considera además el Despacho que no es pertinente acceder a dicha solicitud, teniendo en consideración que no se constata del material probatorio allegado una clara y evidente amenaza a un derecho que pueda llegar a convertirse en una vulneración que deba ser atendida de manera urgente, ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

De otro lado, respecto de la facultad para que el Juez de Tutela pueda decretar pruebas, la Corte Constitucional ha dicho en reciente jurisprudencia, la facultad – deber con que cuenta el Juez Constitucional para poder establecer si los hechos fácticos demuestran la existencia de una amenaza o vulneración del derecho fundamental alegado, como lo hizo en sentencia T-571 del 2.015, donde señaló:

Ahora bien, en caso de que el actor no aduzca pruebas que apoyen su pretensión, la Corte Constitucional ha sido enfática en declarar la facultad – deber que le asiste al juez constitucional de decretar pruebas de oficio, con las cuales se pueda determinar si realmente existe una amenaza o vulneración del derecho. En Sentencia T-864 de 1999, señaló: “Así las cosas, la práctica de pruebas para el juez constitucional no es sólo una potestad judicial, sino que es un deber inherente a la función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa juzgada, exige una definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto planteado. También en Sentencia T-498 de 2000, la Corte se refirió a la facultad de decretar pruebas de oficio en un caso de tutela instaurado a favor de una menor de edad de edad que padecía un tumor cerebral. En esa oportunidad, señaló, que el juez constitucional como principal garante de los derechos fundamentales debe adelantar actuaciones mínimas y razonables para la verificación de los hechos sometidos a su consideración, lo cual reclama del juez una mayor participación en la búsqueda de la máxima efectividad de la Constitución.

Dada esa facultad, el despacho procederá a decretar pruebas de oficio, en busca de verificar los hechos sometidos a consideración.

En atención a lo anterior, dada las afirmaciones expuesta por el accionante, se requerirá a la **Universidad Nacional de Colombia y al Departamento Administrativo de la**



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Función Pública, para que en el término de dos (2) días, como anexos a sus informes, alleguen al despacho lo siguiente:

- Antecedentes Administrativos allegados a la **Universidad Nacional de Colombia y/o al Departamento Administrativo de la Función Pública**, por el Accionante, Federico David Maturana Córdoba, identificado con C.C. No. 8.565.528 para la Convocatoria Realizada por la Defensoría del Pueblo.-
- Copia de la Convocatoria del Proceso de Selección de Defensores Públicos de la Defensoría del Pueblo, con todos los actos que la hayan modificado, suspendido y/o anexado, si las hubiese.-
- Certifique la etapa en que se encuentra el Proceso de Selección de Defensores Públicos de la Defensoría del Pueblo.-

Por último y dado que la decisión que se adopte en la presente acción, eventualmente pudiera afectar los intereses de terceros que hacen parte del Proceso de Selección de Defensores Públicos de la Defensoría del Pueblo, ordenará a la **Defensoría del Pueblo, a la Universidad Nacional de Colombia y el Departamento Administrativo de la Función Pública**, que publiquen en sus respectivas páginas web, la admisión de la presente acción de tutela, a fin de que se notifique a quienes pudieran estar interesados en los resultados de la presente acción, quienes tendrán el término de dos (2) días para que se pronuncien sobre la demanda de tutela.

Por último y al reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido en el núm. 2º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000 y decreto 1983 de 2017 se,

RESUELVE:

- 1. ABSTENERSE** de decretar la medida provisional solicitada por el accionante, de conformidad a lo expuesto en la presente providencia.
- 2. ADMÍTASE** la demanda interpuesta por el señor **Federico David Maturana Córdoba**, quien actúa en nombre propio, contra la **Defensoría del Pueblo, la Universidad Nacional de Colombia y el Departamento Administrativo de la Función Pública.**-
- 3. NOTIFÍQUESE** personalmente el contenido de este auto a los representantes legales de la **Defensoría del Pueblo, de la Universidad Nacional de Colombia y del Departamento Administrativo de la Función Pública.** y/o quien haga sus veces, por el medio más expedito y eficaz.
- 4. INFÓRMESE** a las entidades demandadas que en el término de dos (2) días y por el medio más expedito pueden rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción, advirtiéndole que la información suministrada se considerará rendida bajo la gravedad del juramento y que la inobservancia a contestar acarrea las sanciones consagradas en los Arts. 19, 20 y 52 del Decreto 2591 de 1991.
- 5. REQUIÉRASE** a la **Universidad Nacional de Colombia y al Departamento Administrativo de la Función Pública**, para que en el término de dos (2) días, alleguen al despacho lo siguiente:



**Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

- Antecedentes Administrativos allegados a la **Universidad Nacional de Colombia y/o al Departamento Administrativo de la Función Pública**, por el Accionante, Federico David Maturana Córdoba, identificado con C.C. No. 8.565.528 para la Convocatoria Realizada por la Defensoría del Pueblo.-
- Copia de la Convocatoria del Proceso de Selección de Defensores Públicos de la Defensoría del Pueblo, con todos los actos que la hayan modificado, suspendido y/o anexo, si las hubiese.-
- Certifique la etapa en que se encuentra el Proceso de Selección de Defensores Públicos de la Defensoría del Pueblo.-

6. ORDENAR a la **Defensoría del Pueblo, a la Universidad Nacional de Colombia y al Departamento Administrativo de la Función Pública** que publiquen en sus respectivas páginas web, la admisión de la presente acción de tutela, a fin de que se notifique a quienes pudieran estar interesados en los resultados de la presente acción, quienes tendrán el término de dos (2) días para que se pronuncien sobre la demanda de tutela.-

La anterior orden al ser cumplida, deberá ser informada al despacho por dichas entidades, con sus respectivas constancias.-

7.- TÉNGANSE como pruebas, en lo que fuere conducente, los documentos aportados por la parte demandante en su escrito tutelar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ**

<p>NOTIFICACION POR ESTADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRONICO N° _____ DE HOY _____ A LAS 8:00 P.M.</p> <p>_____</p> <p>ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS SECRETARIO</p> <p>SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 201 DEL CPACA</p>
